
EDITORIAL*

CRISIS, POPULISMO Y DESTRUCCIÓN CREATIVA

Quienes perciben que *algo va mal*, que las cosas han dejado de funcionar como antaño, que el contrato social está roto o irreconocible, son multitud, no una minoría a la que se puede calificar como poco inteligente, ignorante, sucia y deshonesto, según calificativos usados en las últimas campañas presidenciales en los Estados Unidos.

El malestar cobija a cientos de millones de ciudadanos de todos los continentes. Se antoja un tsunami. No es casual, entonces, que una parte muy considerable de esa muchedumbre, se identifique con Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, cuando declaró, hace más de siete años, que la era de la democracia liberal había terminado, porque ya no era capaz de garantizar la libertad, ni ofrecer seguridad ni preservar el cristianismo. Fue durante su primer discurso tras ser reelegido jefe del Gobierno por tercera vez consecutiva, gracias a la mayoría absoluta de su partido, el Fidesz, que Orbán formuló esa idea. Aquella afirmación ha hecho metástasis en los discursos políticos de todos los continentes, no por convicción política o filosófica sino porque describía sin tapujos un malestar: el convencimiento de que las instituciones ya no responden a las expectativas creadas por ellas mismas.

Fue Norberto Bobbio quien, en 1984 — en los albores del ascenso neoliberal—, habló de las promesas incumplidas de la democracia. Bobbio advirtió que entre sus ideales normativos y su funcionamiento real se había abierto una brecha profunda. ¡Y esto hace más de cuarenta años!

La crisis de la democracia es sistémica, obedece a múltiples causas y se enraíza en el fracaso histórico a la hora de cumplir sus compromisos fundacionales. Según Bobbio, la democracia ha incumplido sus promesas fundacionales de múltiples maneras. En primer lugar, ha producido el eclipse del individuo soberano, desplazado por una

* DOI: <https://doi.org/10.18601/01245996.v28n54.01>

miríada de grupos organizados y de interés que, en el mejor de los casos, han reducido el propósito común de la nación a la búsqueda única del lucro. El Estado ha mutado en una especie de sistema neocorporativo, donde los acuerdos entre grandes actores colectivos han desplazado la deliberación pública ciudadana. La fotografía oficial de la investidura del presidente estadounidense lo ilustra con fuerza: a su lado, los CEO de las grandes corporaciones, seguidos de políticos dispuestos a hacer leña del árbol democrático. Entre ellos, un nutrido grupo de colombianos, encarnizados opositores del gobierno actual.

En consecuencia, la democracia se ha convertido en un pacto o lucha de élites en competencia por el voto popular, conforme a la canónica definición de Joseph A. Schumpeter. La democracia ha renunciado a informar a la sociedad, si alguna vez lo intentó; y menos aún ha conseguido democratizar o influir de modo significativo en la empresa o la burocracia. A esto se suma la persistencia del Estado invisible o criptogobierno, donde poderes ocultos —generalmente vinculados al crimen organizado— socavan la democracia e impiden la transparencia, otra de las grandes promesas rotas del sistema liberal. Finalmente, se ha incumplido el ideal de una ciudadanía activa y virtuosa, al estilo republicano antiguo, pues en su lugar predominan la apatía política y el clientelismo.

El analista político Francis Fukuyama habla de la decadencia de la democracia, el retorno del clientelismo y del regreso del Estado patrimonial. En este escenario, la colusión entre actores políticos, magnates e ilegalidad ha dado a luz un Estado donde priman la cooptación y la sustitución de las instituciones democráticas por instancias híbridas, que borran los límites entre lo legal y lo criminal, minando por completo la confianza ciudadana.

La falta de transparencia se constituye así, no en fallo, sino en el alma del sistema, su característica. Se manifiesta en la colusión estructural entre actores políticos, élites económicas y grupos ilegales, creando un Estado dual (visible/invisible). En contextos de baja presencia estatal, esto deriva en la cooptación o sustitución de instituciones por órdenes híbridas o “crimilegales”. Por otra parte, existe una fractura profunda y una desafección generalizada hacia las instituciones representativas tradicionales (partidos, parlamentos). Esta desconexión, sumada a la exclusión de minorías (mujeres, jóvenes, migrantes) de los espacios de poder, genera un vacío que es llenado por liderazgos personalistas, populistas y autoritarios. Estos ofrecen un vínculo emocional directo y soluciones simplistas, evadiendo y debilitando aún más los canales institucionales.

El incumplimiento de la promesa de igualdad sustantiva es quizás el más grave. Las desigualdades socioeconómicas abismales y persistentes contradicen la autonomía ciudadana y restringen la participación política efectiva. Esta desigualdad económica se traduce en desigualdad política, donde los intereses de las élites económicas capturan el Estado, generando un círculo vicioso de malestar, impotencia e inestabilidad. Estos incumplimientos se retroalimentan y constituyen el caldo de cultivo para fenómenos globales como el populismo autoritario y la democracia iliberal, que capitalizan el resentimiento para erosionar libertades y controles institucionales desde dentro.

Frente a tamaño desafío, la respuesta de las democracias liberales ha sido, en muchos casos, insuficiente, vacilante, casi pusilánime. Es evidente que vivimos tiempos extraños — *interesantes*, según la maldición china —, marcados por una sensación de inestabilidad permanente y una profunda fractura de la confianza necesaria entre gobernantes y gobernados.

¿Se podría decir que estamos ante el final de una era, o un cambio de época? La respuesta, todavía difusa, implica revisar la política, la economía y la cultura. Con todo, hay que matizar: el escenario global no es homogéneo ni unívocamente regresivo. En diferentes regiones del mundo, han surgido indicios recientes que permiten relativizar el pesimismo dominante.

En Nueva York, por ejemplo, Zohran Mamdani, candidato demócrata de izquierda, ha ganado las elecciones y será el primer alcalde musulmán de la ciudad. Su victoria fue contundente: más de un millón de votos —el 50% del total— y una ventaja de nueve puntos sobre su principal oponente.

La elección de Mamdani ofrece una lección significativa para la centroizquierda europea y otras democracias capitalistas: la necesidad de transformar la economía a partir de las necesidades sociales básicas y de la reproducción cotidiana, más que del mero crecimiento económico. Ante la crisis del costo de vida, Mamdani plantea un reformismo de raíz colectivista, centrado en la reorganización de sectores clave como la vivienda, la salud y el transporte mediante alianzas público—sociales, sin necesidad de nacionalizaciones integrales.

Su propuesta articula medidas inmediatas, como la gratuidad del transporte y la congelación de alquileres, con reformas estructurales orientadas a devolver poder a la ciudadanía. Esta estrategia, que conjuga radicalismo político con pragmatismo institucional, busca

renovar los fundamentos materiales de la vida cotidiana como vía para fortalecer la democracia y reconstruir la cohesión social.

En Irlanda, Catherine Connolly ha asumido la presidencia, un cargo de carácter simbólico, aunque de gran valor para muchos ciudadanos, especialmente por su compromiso con valores democráticos y de justicia social.

En los Países Bajos, el partido de centro D66 se impuso, por estrecho margen, al extremista PVV de Geert Wilders, que pierde fuerza tras su auge de 2023. Aunque la extrema derecha retrocede, la derecha en su conjunto se reorganiza y mantiene su peso político.

Estos acontecimientos no permiten concluir que el ciclo político haya cambiado de manera definitiva, ni que el populismo autoritario esté en retirada. No obstante, invitan a matizar la tesis de la inminente desaparición del orden liberal. Lo que se perfila es un panorama fragmentado, con tensiones políticas agudas, descontento social generalizado y una democracia sometida a múltiples presiones.

Cuando parece que empezamos a entender una crisis, nos golpea la siguiente. La crisis financiera de 2008—*la gran recesión*, la bautizaron algunos autores — dejó al descubierto la fragilidad de un modelo económico que antepuso la especulación a la creación de valor real. Fue un infarto que casi paraliza al mundo. Y cuando aún seguíamos recuperándonos, la pandemia de la COVID-19 evidenció hasta qué punto eran vulnerables nuestros sistemas de salud y, quizás más grave aún, nuestras instituciones políticas. De hecho, algunas democracias liberales manejaron la crisis mucho peor que regímenes autoritarios.

No fueron solo “crisis” entendidas como eventos inesperados. En muchos sentidos, fueron fracasos: fracasos de imaginación, de gestión y de responsabilidad. Hay quienes afirman que la pandemia fue el último clavo en el ataúd de la democracia liberal.

La pandemia, en particular, no fue solo una crisis que hubo que gestionar; fue, como señalan con acierto los académicos Branislav Radeljić y Carlos González-Villa, una verdadera crisis de gestión. En uno de sus estudios, muestran con claridad cómo los líderes de las democracias liberales, al enfrentarse a un “enemigo invisible”, reaccionaron casi todos igual: recurriendo instintivamente a la metáfora de la guerra.

Escuchamos a Emmanuel Macron declarar que “Francia estaba en guerra”, a Donald Trump describirse como un “presidente en tiempos de guerra”, y a Angela Merkel invocar el mayor reto “desde la Segunda Guerra Mundial”. Esta retórica bélica, como explican los autores, no fue un acto de liderazgo, sino una manera de evadir

responsabilidades. Sirvió para inflar su imagen de autoridad y, sobre todo, para protegerse cuando las cosas salieron mal. Al fin y al cabo, una guerra —por definición— implica víctimas. Mientras se envolvían en la bandera, los gobiernos esquivaban la rendición de cuentas. Se centraron, según los autores, en “las políticas menos perjudiciales para la continuidad del poder”. En muchos casos, utilizaron la ciencia no como guía prudente ante la incertidumbre, sino como argumento de autoridad para justificar decisiones ya tomadas.

Otros, en cambio —como Donald Trump o Jair Bolsonaro— hicieron justo lo contrario: usaron la crisis del COVID-19 para ridiculizar a los científicos, sembrar desconfianza y dar rienda suelta a teorías conspirativas que rozaban el delirio. En ambos extremos, la instrumentalización de la verdad fue la norma.

El resultado fue una pérdida masiva de confianza en las instituciones. Muchos comprendieron, con amargura, que el eslogan “estamos todos juntos en esto” era, en el mejor de los casos, una ilusión. La “nueva normalidad” encubrió una polarización creciente y el aumento de las desigualdades. El relato colectivo pasó de “nosotros contra el virus” al “nosotros contra ellos”.

Ese ambiente de desconfianza alimentó el auge de movimientos populistas, en la mayoría de los casos de carácter autoritario. El crecimiento de los movimientos de derecha radical— que algunos llaman sin rodeos neofascismo —se alimenta directamente de esa narrativa: “las élites nos fallaron”. Y, siendo honestos, cuesta rebatirlo.

Pero si el populismo acierta en el diagnóstico (la ruptura de la confianza), sus recetas —aislacionismo, nacionalismo, proteccionismo, ruptura institucional—son tóxicas. Pretenden curar la enfermedad matando al paciente.

¿Estamos atrapados entre un *establishment* liberal que eludió sus responsabilidades y un populismo autoritario que ofrece soluciones ilusorias?

Afortunadamente, no. Y es justamente ese espacio de posibilidad en donde la *Revista de Economía Institucional* desea centrar sus análisis.

EL NOBEL A LA INNOVACIÓN: UNA HOJA DE RUTA EN TIEMPOS DE CRISIS

En medio de este panorama de incertidumbre, el Premio Nobel de Economía 2025 ha sido otorgado a tres académicos, cuyo trabajo conjunto ofrece una hoja de ruta coherente para salir del atolladero actual: Philippe Aghion, Peter Howitt y Joel Mokyr.

El premio les fue concedido por “haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”. La Academia distribuyó los once millones de coronas suecas de forma significativa: la mitad para Mokyr, por “haber identificado los prerequisites históricos para un crecimiento sostenido basado en el progreso tecnológico”, y la otra mitad para Aghion y Howitt — un cuarto cada uno —, por su “teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa”.

Aunque suene técnico, este premio es una respuesta directa a la ansiedad y el estancamiento que caracterizan nuestra era. Y es que el trabajo de estos tres autores intenta explicar lo que tal vez sea el mayor misterio económico de la historia: ¿por qué, después de siglos de estancamiento, la humanidad comenzó a crecer sostenidamente en los últimos doscientos años? Al fin y al cabo, la economía del desarrollo está lejos de conseguir el nivel técnico que han alcanzado, por ejemplo, la microeconomía y la macroeconomía. Como se ha dicho, no sabemos todavía cuál es el camino más cierto para llegar a Dinamarca.

Empero, este galardón representa un cambio de paradigma. Durante décadas, el modelo de crecimiento dominante —formulado por Robert Solow, Nobel en 1987— trataba la innovación como un factor “exógeno”: una especie de milagro que impulsaba el crecimiento pero que el modelo no podía explicar. Un *residuo* que no se explica por los aumentos en los insumos de capital y trabajo. Representa la parte del crecimiento económico atribuible a factores como la innovación tecnológica y las mejoras en la eficiencia.

Mokyr, Aghion y Howitt dismantelaron esa caja negra. Pusieron la innovación en el centro del análisis económico, como un fenómeno que se puede estudiar, medir y, sobre todo, orientar mediante políticas públicas.

Con ello, también cerraron un debate clave en la última década. De un lado, el pesimismo de autores como Robert Gordon, quien sostiene que las grandes ideas ya se inventaron —agua corriente, electricidad, antibióticos— y que lo actual es marginal. Ese desencanto ha alimentado el discurso del “decrecimiento” y la resignación frente al estancamiento.

Del otro lado, Mokyr ha defendido con fuerza una tesis opuesta: la innovación no se agota, sino que se acelera. Sus argumentos se apoyan en tres ideas:

1. Las herramientas científicas actuales— desde el telescopio hasta los superordenadores — permiten ver más lejos que nunca.

2. El acceso masivo a la información favorece lo que él llama “la reproducción de ideas”, es decir, su entrecruzamiento y la generación de nuevas.

3. Las instituciones modernas —como el sistema de ciencia abierta— fomentan la colaboración y el intercambio de conocimiento.

El Nobel 2025 premia ese optimismo ilustrado, reconociendo en Mokyr al historiador del crecimiento y en Aghion y Howitt a los matemáticos que demostraron cómo la innovación genera expansión económica sostenida. Su teoría se articula en torno a un concepto clave: la destrucción creativa. Este paradigma schumpeteriano se basa en tres pilares:

1. La innovación es la principal fuente de crecimiento. Cada nuevo avance se sustenta en el anterior: el progreso es acumulativo.

2. Innovar requiere incentivos. No es fruto de la magia, sino de la inversión guiada por expectativas de retorno. De ahí la importancia de proteger la propiedad intelectual.

3. Toda innovación desplaza lo anterior. Lo nuevo reemplaza a lo viejo, generando conflicto entre innovadores y quienes desean conservar su posición.

Aquí reside la gran paradoja del capitalismo: los innovadores de ayer se convierten en los defensores del *statu quo*. Schumpeter creía que este conflicto llevaría al fracaso del capitalismo. Aghion, Howitt y Mokyr creen que se puede evitar. La solución, argumentan, no es abolir el capitalismo, sino regularlo para salvarlo de sí mismo.

Aghion, en su obra *El poder de la destrucción creativa*, utiliza una imagen poderosa: el capitalismo es un caballo brioso, que corre desbocado. La clave no es detenerlo, sino tomar las riendas.

Desde esta perspectiva, los autores abordan tres grandes desafíos contemporáneos:

1. ¿Cómo gestionar el lado oscuro de la innovación? La destrucción creativa genera progreso, pero también desempleo, precariedad y ansiedad. En Estados Unidos, esta dinámica ha contribuido al auge de las “muertes por desesperación” en zonas desindustrializadas. La respuesta no es frenar la innovación, sino acompañarla. Modelos como el danés, basados en la “*flexiseguridad*”, ofrecen un marco: libertad para innovar, pero con una red de protección robusta. Esto implica formación continua, seguro de desempleo fuerte y movilidad intersectorial.

2. ¿Cómo reducir la desigualdad sin frenar el crecimiento? Aghion sostiene que el problema no es la riqueza per se, sino la desigualdad de oportunidades. En sus estudios, muestra que los niños pobres tienen muy pocas probabilidades de convertirse en inventores. Esto es no

solo injusto, sino ineficiente. La educación pública de calidad emerge como la política más eficaz para estimular la innovación inclusiva.

3. ¿Qué papel debe desempeñar el Estado? Los autores proponen un Estado inversor, no solo protector: uno que oriente la innovación hacia fines colectivos como la transición ecológica. Esto implica fiscalidad verde, inversión en I+D, apoyo a la competencia y control sobre el poder de las empresas superdominantes.

Aghion recuerda un caso histórico, mencionado por Acemoglu y Robinson en su libro *Por qué fracasan los países: Venecia*. Su esplendor se basó en la *colleganza*, un contrato que permitía financiar libremente el comercio. Su caída empezó con la *Serrata*, cuando una élite cerró el acceso a ese sistema. Hoy, las grandes tecnológicas podrían estar replicando esa lógica: cerrar la puerta a los innovadores del mañana.

Las crisis actuales son reales. La desconfianza está justificada. Pero el pesimismo y el populismo autoritario no son salidas. El trabajo de Aghion, Howitt y Mokyr nos ofrece herramientas para pensar un capitalismo más dinámico, sostenible y humano. Nos invitan a dejar de ser víctimas de la disrupción y a convertirnos en sus arquitectos.

COLOMBIA: UN PAÍS EN TENSIÓN PERMANENTE

Hace apenas una década, pese a la persistente e irracional oposición al gobierno, se vislumbró un momento de esperanza, aunque frágil, tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. El contraste con la situación actual no podría ser más marcado. Durante algunos meses fue posible recorrer el país sin temor a secuestros, y los atentados disminuyeron de manera significativa. Al finalizar el gobierno que suscribió dicho Acuerdo, la oposición de entonces accedió al poder, con el propósito, entre otros, de obstaculizar la consolidación de una paz largamente esquivada.

Hoy, Colombia enfrenta fracturas estructurales en diversos frentes, especialmente en seguridad y relaciones exteriores. La pregunta fundamental se impone: ¿cómo reconstruir la confianza institucional en una nación atrapada entre la violencia crónica, la debilidad estatal y una polarización política creciente?

Colombia no escapa a los vientos geopolíticos que soplan desde la potencia hemisférica. Francis Fukuyama ha escrito con amplitud acerca de la decadencia política en las democracias occidentales, y buena parte de la oposición colombiana ha replicado la retórica y estrategias confrontacionales propias de la administración estadounidense. Esta

imitación no es un fenómeno aislado; puede observarse también en países como México, Argentina y Brasil.

La actual crisis de seguridad y el retorno del miedo han facilitado el avance de una oposición cada vez más radical, que representa a una clase dispuesta a todo con tal de recuperar el poder que ha detentado casi ininterrumpidamente durante más de dos siglos de vida republicana. No se trata únicamente de los asesinatos recientes; también debe considerarse el incremento de la violencia en la extensa frontera con Venezuela —más de dos mil kilómetros—, agravada por el colapso del Estado venezolano. Este entorno ha permitido la proliferación de actores armados que desafían al Estado colombiano, cuyas capacidades de control territorial se encuentran limitadas.

Aunque no se avizora un colapso inminente del Estado, sí es evidente su incapacidad para imponer de manera sostenida el monopolio legítimo de la violencia, conforme a la concepción weberiana. La estrategia de “Paz Total” impulsada por la actual administración presenta debilidades manifiestas: negociaciones fragmentadas, ausencia de verificación efectiva, escasez de recursos, y una expansión descontrolada de estructuras criminales atomizadas.

A este panorama interno se suma el deterioro de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, en uno de sus puntos más bajos desde la pérdida de Panamá. Las diferencias entre ambos países han dejado de canalizarse mediante vías institucionales, siendo sustituidas por acusaciones mutuas, tensiones en redes sociales y acciones unilaterales de carácter militar. Este deterioro es particularmente grave, dada la relevancia estratégica de Estados Unidos para Colombia en materias de seguridad, comercio y geopolítica continental. La diplomacia ha sido desplazada por un discurso beligerante, en particular desde la administración norteamericana, que ha replicado este patrón incluso con sus aliados en la OTAN.

En el plano interno, la polarización se ha agudizado. Un sector de la oposición, incluyendo periodistas, actúa en consonancia con los intereses y retóricas de Washington, llegando incluso a insinuar una intervención militar en el país como extensión del conflicto venezolano. Esta dinámica se ve agravada por la propagación de desinformación a través de inteligencia artificial, noticias falsas, debilitamiento institucional y una confrontación política permanente.

La absolución de un expresidente fue celebrada por la derecha como un triunfo de la justicia. Días después, su hermano fue condenado a 28 años de prisión por liderar un grupo paramilitar y cometer homicidio agravado. Entonces, los mismos sectores denunciaron que

la justicia estaba cooptada por intereses subversivos. Este contraste revela una tendencia preocupante: las decisiones judiciales se aplauden cuando favorecen intereses propios y se descalifican cuando resultan contrarias. Así, se profundiza la polarización y se debilita la confianza en la independencia y legitimidad del sistema judicial. Este episodio evidencia la fragilidad del sistema judicial, la escasa aceptación de las decisiones judiciales por parte de diversos actores y la necesidad urgente de recuperar la *sindéresis* como principio rector en la vida institucional. Moderación, respeto institucional y cultura democrática son esenciales para que las sentencias judiciales no se conviertan en catalizadores de nuevos conflictos sociales.

UN BALANCE NECESARIO

A medida que el primer gobierno sedicentemente de izquierda se acerca al final de su mandato, realizar un balance ponderado resulta más necesario que nunca. El juicio es dual, lleno de contrastes y claros-oscuros. Por un lado, la administración puede exhibir logros reales: se alcanzó el nivel más bajo de pobreza monetaria en más de una década, recuperó para Colombia un protagonismo diplomático notable en foros multilaterales y aceleró el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto. También dejó logros simbólicos e institucionales, como la creación de las Entidades Territoriales Indígenas.

Sin embargo, estas luces conviven con sombras. El país no logró superar las violencias estructurales; indicadores como masacres, desplazamientos forzados y homicidios de líderes sociales se mantuvieron en niveles críticos. En lo económico, la gestión se caracterizó por una crisis fiscal aguda y la peor ejecución presupuestal en inversión social en dos décadas. Pero quizás el capítulo más crítico del balance se escribe en el debilitamiento de la gobernabilidad y las normas institucionales. La administración se desenvolvió en un estado de tensión permanente y confrontación con otros órganos del Estado, manifestado en una alta rotación ministerial, un discurso presidencial que en ocasiones calificó de “ruptura institucional” acciones de organismos de control, y episodios de presión fáctica sobre la rama judicial. Esta postura resulta paradójica, pues fue precisamente esa independencia judicial la que en el pasado protegió los derechos políticos del entonces alcalde de Bogotá.

Un ejemplo notorio de esta tensión fue el fallido intento de convocar una consulta popular mediante decreto ejecutivo, tras no obtener un concepto favorable del Senado. La justificación gubernamental

—basada en la supuesta “inexistencia” del acto del Senado debido a irregularidades en su votación—no solo era jurídicamente defectuosa al confundir la inexistencia con la posible nulidad (que solo una autoridad judicial puede declarar), sino políticamente riesgosa. Al pretender declarar por sí mismo la inexistencia del acto, el ejecutivo se habría arrogado una facultad ajena, violando el principio de separación de poderes.

El fondo del asunto, más allá de la polémica legal, es de principios democráticos. La exigencia constitucional de un concepto previo del Senado no es un formalismo, sino un muro de contención esencial. Siguiendo a Jon Elster, es necesario que Ulises tenga las manos atadas al mástil. Su propósito es evitar que, en un sistema presidencialista, el jefe de Estado pueda recurrir de manera unilateral y frecuente al plebiscito, transformando la democracia representativa en un régimen plebiscitario donde el diálogo con el legislativo es reemplazado por apelaciones directas —y potencialmente manipuladoras— al pueblo. Este episodio, por lo tanto, se alinea directamente con las promesas incumplidas diagnosticadas por Bobbio: muestra una tensión en la representación (el ejecutivo buscando evadir al legislativo), un riesgo para el equilibrio de poderes y una potencial degradación de la ciudadanía, al plantear un mecanismo de participación que podría vaciar de contenido la deliberación institucional. Dicho lo cual, es menester recordar que esa, y no otra, fue la manera habitual de proceder de las administraciones anteriores, en particular la del condenado, y luego absuelto, expresidente.

La crisis institucional se vio exacerbada por graves escándalos de corrupción que empañaron la promesa de un “gobierno limpio”. Casos como el de la UNGRD o el cartel de los cupos indicativos en Invías revelaron prácticas delictivas al más alto nivel.

Este patrón de tensión institucional no es nuevo ni exclusivo de un sector. Un análisis comparativo reciente muestra desviaciones de poder en la selección de altos jueces que son preocupantemente similares entre el gobierno actual y el anterior, evidenciando una continuidad estructural en prácticas que buscan cooptar la justicia. Este es quizás el ejemplo más claro de una “promesa incumplida” en acción: la persistencia de poderes oligárquicos y la instrumentalización de las instituciones, independientemente del color político del gobernante de turno.

En el plano social, las estadísticas revelan una disminución de la pobreza multidimensional, aunque se observan retrocesos en salud —herencia de políticas previas—, y la corrupción, si bien contenida,

persiste. No hay avances significativos en empleo ni educación. La pobreza sigue afectando con mayor severidad a mujeres, comunidades étnicas y personas migrantes. Se trata, en suma, de una gestión con claroscuros, que refleja una larga tradición de gobiernos que han administrado el país sin transformar sus estructuras profundas, como sugiere James Robinson. Tal como destacaron los premios Nobel de Economía en 2024, Colombia aún no ha tenido un gobierno capaz de impulsar reformas que garanticen equidad, bienestar ciudadano y mayor calidad democrática de manera estructural.

¿Es posible hablar de un pacto nacional? ¿O deberíamos admitir que dicho pacto jamás existió en sentido pleno? La Constitución de 1991 fue, quizás, el intento más ambicioso de forjar un acuerdo incluyente. Sin embargo, hoy se encuentra profundamente erosionada.

La próxima administración enfrentará desafíos de gran magnitud: reconstruir una política de seguridad con presencia estatal efectiva en todo el territorio; recuperar una diplomacia profesional, basada en el respeto mutuo; garantizar la integridad del sistema judicial y su aceptación por todos los actores; despolarizar el discurso político mediante liderazgos responsables; asegurar la continuidad de políticas contra la pobreza; y, sobre todo, formular un proyecto de Estado que recupere la cordura institucional y la capacidad de construir consensos.

Desde el fin de la Guerra de los Mil Días, Colombia ha demostrado una notable capacidad de resistencia. Pero hoy, sus instituciones se encuentran en el límite. Solo un liderazgo sobrio, comprometido con la regeneración de la confianza pública, podrá evitar que el país caiga nuevamente en los ciclos de violencia que han amojonado su historia.

Al fin y al cabo, Colombia también merece una segunda oportunidad sobre la Tierra.

CONTENIDO

Este número de la Revista de Economía Institucional se abre bajo la huella del Premio Nobel de Economía 2025 otorgado a Aghion, Howitt y Mokyr. Su premio reafirma una premisa central de esta publicación: la innovación no es un residuo exógeno, sino un proceso de “destrucción creativa” que requiere ser gobernado. Lejos del *laissez-faire*, los laureados nos recuerdan que el progreso técnico exige una arquitectura pública o estatal capaz de proteger a los perdedores del cambio (flexiseguridad) y dirigir la innovación hacia fines colectivos.

Esta tesis —que las herramientas económicas dependen del “suelo” institucional donde aterrizan—sirve de marco para los estudios empíricos y teóricos que presentamos en esta edición.

Tres investigaciones desmontan la idea de que los indicadores macroeconómicos garantizan, por sí solos, el bienestar. En México, Andrade Rosas y Coronado González demuestran que la Inversión Extranjera Directa (IED) no es neutra: actúa como un “acelerador” del bienestar solo donde existen instituciones sólidas, pero se convierte en un “freno” extractivo en regiones con gobernanza débil.

Paralelamente, Rodríguez Cedillo desafía la ortodoxia del superávit fiscal a nivel subnacional, revelando que el equilibrio presupuestario no se correlaciona necesariamente con mejoras en el desarrollo humano. En el caso colombiano, Hincapié Vélez y Galvis Ciro aportan una sofisticada medición econométrica —regresión cuantílica—para confirmar que la corrupción no golpea a todos por igual: su daño es asimétrico y se ensaña con los municipios de menor desempeño fiscal, atrapándolos en una trampa de ineficiencia.

El número se complementa con una profunda reflexión sobre cómo pensamos la economía. Jorge Iván González lanza una crítica al positivismo de los manuales tradicionales, abogando por recuperar la “construcción imaginaria” de Mises y reintegrar la subjetividad y la ética en la enseñanza. En el plano jurídico, Vela Orbeagoz pone a dialogar a Kant y Kelsen sobre el control del poder. Mientras Kant busca subordinar la economía a la justicia moral, Kelsen intenta blindar el derecho de la captura privada mediante la pureza formal. Ambos coinciden en la urgencia de evitar que el poder económico desborde el cauce legal. Asimismo, el Dossier Walras–Péguy nos muestra un León Walras “socialista”, generalmente obliterado, cuando no desconocido, cuya matemática del equilibrio general fue leída por Charles Péguy no como abstracción fría, sino como un intento moral de eliminar los privilegios del mercado.

Finalmente, el número cierra estableciendo un diálogo irónico con el dossier anterior a través del cuento “Adam en el mercado perfectamente competitivo”, de Karine Nyborg. Si Walras y Péguy soñaban con el mercado perfecto como un ideal de justicia, Nyborg explora ese mismo modelo como una pesadilla vivencial. Esta sátira lleva las premisas neoclásicas a su extremo lógico: en un mundo de contratos completos y ausencia de incertidumbre, la eficiencia teórica deriva en una distopía social. El relato sugiere que los llamados “fallos de mercado”—el afecto, la confianza, la vulnerabilidad—no son defectos

a corregir, sino condiciones esenciales de la vida humana que ninguna ecuación de equilibrio general puede, ni debe, capturar.

En conjunto, estos textos nos recuerdan que, sin una comprensión profunda de las instituciones y de la condición humana, la economía corre el riesgo de ser una técnica estéril o, peor aún, una herramienta de exclusión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aghion, P., Antonin, C. y Bunel, S. (2021). *El poder de la destrucción creativa: ¿Qué impulsa el crecimiento económico?* Deusto.
- Bobbio, N. (1984). *Le promesse non mantenute della democrazia. Mondo-peraio*, (5).
- Bobbio, N. (1986). *El futuro de la democracia*. Fondo de Cultura Económica.
- Dejusticia. (2023, septiembre 15). *Mea culpa liberal*. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. <https://www.dejusticia.org/column/mea-culpa-liberal/>
- Dejusticia. (2024, febrero 11). *Petro y las instituciones*. <https://www.dejusticia.org/column/petro-y-las-instituciones/>
- Dejusticia. (2024, noviembre 18). *La constituyente: improvisada, inconveniente y riesgosa*. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. <https://www.dejusticia.org/column/la-constituyente-improvisada-inconveniente-y-riesgosa/>
- Dejusticia. (2025, agosto 7). *Recta final del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez: nuestro balance*. <https://www.dejusticia.org/recta-final-del-gobierno-de-gustavo-petro-y-francia-marquez-nuestro-balance/>
- Fukuyama, F. (2016). *Orden y decadencia de la política: Desde la revolución industrial a la globalización de la democracia*. Ediciones Deusto.
- Fukuyama, F. (2022). *El liberalismo y sus desencantados: Cómo defender y salvaguardar nuestras democracias liberales*. Deusto.
- Piedrahita-Bustamante, P., Casas-Ramírez, D. A., & Durán-Martínez, A. (2025, marzo 11). *Promesas incumplidas de la democracia: secreto, representación y desigualdades*. Desafíos. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.15285>
- Radeljić, B., & González-Villa, C. (2024). *De la gestión de crisis a la crisis de gestión: responsabilidad y democracias liberales en el estallido de la pandemia de la COVID-19*. *Arbor*, 200(811), a002. <https://doi.org/10.3989/arbor.2024.811.002>